



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN
SALA UNITARIA DE DECISIÓN**

Medellín, trece de enero de dos mil veintitrés

Radicado: 05001-31-03-011-2022-00341-01

Decisión: Revoca auto

ASUNTO

Resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del auto proferido el 11 de noviembre de 2022 por el Juzgado Once Civil del Circuito de Oralidad de Medellín en el que rechazó la demanda.

ANTECEDENTES

1. Banco de Bogotá S.A., como cesionaria de Leasing Corficolombiana S.A. en la calidad de arrendadora, presentó demanda ejecutiva contra Jesús María Daza Cifuentes pretendiendo el pago de los cánones de arrendamiento adeudados por el demandado desde el 29 de noviembre de 2018, en virtud del contrato de leasing financiero No. 33657.

2. Mediante auto del 6 de octubre de 2022, el Juzgado 11 Civil del Circuito de Medellín inadmitió la demanda, entre otras razones, para que el actor precisara en un nuevo hecho o en varios “de qué rubros consiste la cuota mensual a cargo del demandado; la forma en que se calculó cada monto de «amortización capital», «costo financiero» y «seguros»; la fórmula de su actualización, si la tiene; su evolución histórica a lo largo de la relación contractual y si aquellos rubros son independientes o están atados entre sí”.

3. La parte demandante en el término otorgado por el juzgado indicó: “conforme al numeral tercero, se adjunta plan de pagos de proyección del crédito, que se encuentra discriminado en el numeral séptimo del escrito de demanda” y a continuación presentó una tabla en la que discriminó nuevamente, mes a mes, cuánto de la cuota correspondía a “capital”, cuánto a “costo financiero”, cuanto a “seguros”, agregando cuánto disminuía el capital total adeudado mensualmente.

4. La *a quo* mediante auto del 11 de noviembre de 2022 rechazó la demanda. Adujo que, si bien dentro del plazo se intentó subsanar, la actora no logró su cometido. Expuso que la activa solo denunció cada uno de los rubros que se causaron por concepto de “capital”, “costo financiero” y “seguros” sin que “haya esbozado la operación aritmética que permita demostrar los valores adeudados para cada una de las mesadas allí señaladas”.

Agregó que la actora adujo que el capital adeudado era de **\$129'593.728**, pero que al despacho la suma del capital le arrojaba un valor de **\$129'593.740,49**.

5. Banco de Bogotá S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio apelación. Indicó que el contrato en su sección primera estipula la “fórmula para hallar canon vencido”, por lo que en la subsanación presentó la forma de aplicación, haciendo precisión sobre el monto de “capital”, “costo financiero” y “seguros”, por lo que sí se cumplió con lo requerido.

6. La *a quo* no repuso la decisión porque, a su juicio, la fórmula contenida en el contrato no discrimina los tres rubros “capital”, “costo financiero” y “seguros”, sino solamente el referente al capital, sin que la ejecutante haya explicado cómo calculó cada concepto durante la etapa de ejecución contractual. La fórmula debía aplicarse cada tres cánones y en la subsanación no se mostró cómo se actualizó el canon; lo que “desdibuja la claridad y expresividad de la obligación”.

CONSIDERACIONES

El problema jurídico que debe resolver la Sala Unitaria en esta instancia es si la *a quo* podía aplicar o no la consecuencia del rechazo de la demanda por no haberse “esbozado la operación aritmética” que demostrara los valores objeto de la ejecución.

Para el efecto, de entrada, el Tribunal hará una diferenciación entre el rechazo de la demanda y la negativa del mandamiento de pago en el procedimiento ejecutivo, muy pertinente para el caso concreto.

Los incisos 3° y 4° del artículo 90 del Código General del Proceso preceptúan que la demanda será inadmitida, entre otras razones, cuando no se cumplan los requisitos formales, para lo cual se otorgará un término perentorio de 5 días en los que el demandante debe subsanar las falencias enrostradas so pena de rechazo. Esas decisiones están contempladas para toda clase de demandas; la parte activa debe cumplir con los requisitos formales contemplados en el artículo 82 *ibídem* y en cualquier disposición especial.

Cuando lo contenido en la demanda es una pretensión ejecutiva, el juez debe hacer dos análisis: i) el del cumplimiento de los requisitos formales de la demanda a la luz de los artículos 82 y 90 del C.G.P., cuyo incumplimiento genera inadmisión y posteriormente rechazo; ii) y, además, el del documento génesis de la pretensión ejecutiva para determinar si se trata de un documento contentivo de obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, como presupuesto básico de la ejecución.

Son dos análisis distintos que pueden efectuarse en un mismo momento, pero que, sin duda, tienen objetos de estudio diferentes -el primero, los requisitos formales de la demanda; y el segundo, la existencia o no del título ejecutivo- y; además contemplan consecuencias diversas –el primero, la inadmisión y el rechazo por la ausencia de los requisitos formales de la demanda (art. 90 C.G.P.); y el segundo, la negación del mandamiento de pago

por no estar acompañada la demanda del indispensable título ejecutivo. (arts. 422 y 430 del C.G.P.)

En efecto, no puede confundirse el análisis formal de la demanda, con el análisis de la existencia del título ejecutivo; en este último se analizan los pormenores de la obligación para determinar si se puede catalogar como ejecutable, mientras que, en el primero, que puede conducir al rechazo, no se hace un análisis de un aspecto sustancial como la obligación y si esta es clara, expresa y actualmente exigible, sino que se determina si se cumplen los requisitos de la demanda, asunto completamente diferente.

En otras palabras, si la obligación que se pretende ejecutar tiene falencias desde su claridad, expresividad o exigibilidad, el juez no rechaza la demanda, éste puede: 1) librar mandamiento de pago en la forma en que considere legal (inc. 1º del 430 *ejusdem*); 2) negar mandamiento de pago respecto a las obligaciones que no son ejecutivas y librar la orden de apremio por las que sí lo son o; 3) negar totalmente el mandamiento de pago ante una falencia total que dé al traste con el escenario de certeza que debe permear la tutela ejecutiva.

En el caso concreto la juez de primera instancia, pese a que inadmitió la demanda solicitando claridad en los hechos, lo cual, en principio, atañe a la demanda y sus requisitos formales, finalmente rechazó la misma por un aspecto de la obligación a ejecutar, en tanto consideró que la demandante no presentó “la operación aritmética que permita demostrar los valores adeudados para cada una de las mesadas allí señaladas”.

Al hacer referencia a esos “valores adeudados”, la *a quo* alude a la obligación misma y no a un aspecto formal de la demanda; devela un asunto que atañe al carácter de ejecutable o no de la prestación con base en los documentos aportados; si el asunto es que la obligación tiene falencias porque sus “valores” no fueron demostrados, el problema no se sitúa en el análisis de

los requisitos formales de la demanda, sino en el análisis de la existencia o no del título ejecutivo.

Ese análisis de la obligación y la existencia del título ejecutivo no se hizo en el caso concreto; la juez terminó rechazando la demanda, no por un aspecto formal de la demanda, sino por un aspecto formal del título ejecutivo y ello exige una decisión de otra naturaleza, bien sea: 1) librar mandamiento de pago en la forma en que se considera legal y no en la forma en que fue pretendido; 2) negar mandamiento de pago respecto a las obligaciones que no son ejecutivas y librar la orden de apremio por las que sí lo son o; 3) negar totalmente el mandamiento de pago si la falencia solo conduce a esa consecuencia; en todo caso, la decisión no puede ser la del rechazo de la demanda, en tanto los requisitos de ésta sí se satisfacen.

Deslindados los aspectos formales de la obligación de los aspectos formales de la demanda, es claro que la consecuencia del rechazo fue mal aplicada en la primera instancia.

Ahora bien, las falencias encontradas por la *a quo* respecto a la aplicación de la fórmula contenida en la sección primera del contrato de leasing financiero No. 33657 base de la ejecución, no necesariamente conducen a la negación total del mandamiento de pago, y de ahí la importancia de que el problema jurídico sea distinto y se centre en la obligación, para que la primera instancia se enfrente al análisis de ésta.

Si el problema radica en la forma en que se liquidó el capital y en la aplicación de la fórmula para calcular cada canon, el juez, entonces, debe librar el mandamiento de pago en la forma en que considera legal respecto a la literalidad del título ejecutivo; si la dicotomía se centra en que el “capital” es el único que encuentra respaldo en el título ejecutivo y no los conceptos de: “costo financiero” y “seguros”, la orden de apremio solo comprenderá este rubro y descartará, con la negativa parcial, los demás; o si los documentos develan que, en definitiva, ninguna de las obligaciones goza de claridad y

expresividad como lo mencionó la *a quo* en el auto que resolvió la reposición, así se abordará de forma acuciosa de cara a la negativa que corresponda; haciendo, eso sí, un análisis exhaustivo de los documentos base de la ejecución, lo cual no se ha hecho porque se centró el análisis en un rechazo que es inaplicable bajo este contexto.

Con todo, es absolutamente claro que, en el caso concreto, el rechazo de la demanda no era plausible y los argumentos relacionados con la claridad y expresividad de la obligación, ameritan que el problema jurídico sea distinto y enfocado en la obligación contenida en el título ejecutivo, para que se asuma una decisión que atienda a la técnica procesal expuesta.

En ese sentido se **revocará** el auto proferido el 11 de noviembre de 2022, para que el juzgado de primera instancia haga el análisis correspondiente del mérito ejecutivo de las obligaciones objeto de la pretensión, en los términos expuestos; sin aplicar la consecuencia del rechazo de la demanda cimentada en un aspecto que concierne al título ejecutivo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria de Decisión;

RESUELVE: Revocar el auto proferido el 11 de noviembre de 2022, para que el juzgado de primera instancia haga el análisis correspondiente del mérito ejecutivo de las obligaciones objeto de la pretensión, en los términos expuestos; sin aplicar la consecuencia del rechazo de la demanda cimentada en un aspecto que concierne al título ejecutivo.

Notifíquese y cúmplase



Martín Agudelo Ramírez

Magistrado